



Máxima Acuña de Chaupe
simboliza la resistencia
antiminera de Celendín

Precio
S/. 1.00

Lucha Indígena

LLAPA RUNAQ HATARIYNIN

Director: HUGO BLANCO

Año 13 Septiembre N° 145



"Argentina se llenó de pañuelos verdes exigiendo que el aborto voluntario se despenalice y que sea gratuito. Hubo manifestaciones de solidaridad en varios países del mundo".



Continúan los destapes de la corrupción del Poder Judicial

El estado peruano es corrupto por naturaleza. Como es sirviente de las super-corruptas grandes empresas transnacionales no puede ser de otra manera.

El año pasado, los reclusos por corrupción representaban apenas el 1% de la población penal, es decir, 543 personas; que solo el 50% de ellas tenía sentencia; que, por cada 100 procesos en trámite, solo 2 personas estaban privadas de su libertad; y que, de más de mil carpetas de control remitidas por la Contraloría en los últimos años a las fiscalías en todo el país, un bajo porcentaje se convirtieron en procesos.

La corrupción del Poder Judicial fue destapada gracias a Cerapio Roque, juez de la investigación preparatoria del Callao, quien explicó que todo se realizó en el marco de indagaciones a una organización delictiva en el Callao, quien ordenó interceptación de audios, desconoció cargos y nombres de investigados.

“Los pedidos de ampliación de números y plazos en razón a hechos presuntamente delictivos que iban surgiendo como consecuencia de las interceptaciones llevadas a cabo” se aprobaron y fueron debidamente sustentadas en resoluciones.

La fiscal del Callao, Rocío Sánchez dispuso el procesamiento de las personas involucradas en la filtración de los audios de las interceptaciones telefónicas”

Como la información es mucha, no tenemos espacio para publicar todo.

Nos tenemos que conformar con la publicación de algunos casos y un breve resumen.

“LUCHA INDÍGENA”

Editora "Lucha Indígena" RUC: 10060967194
Director: HUGO BLANCO GALDOS
Editor: Enrique Fernández Chacón "Cocho"
Email: cefch70@hotmail.com
Calle Vesta 361 - Rimac - Lima - Perú
Telf: cel. 978 418 216
Comité de Redacción:
Corresponsal en Europa: Pepe Mejía
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú 2008-01061

luchaindigena@gmail.com

Poder Judicial

Contraloría halla indicios de desbalance patrimonial en exmiembros del Concejo Nacional de la Magistratura (CNM)

Nelson Shack, contralor general de la República, informó que este indicio fue detectado en dos jueces y cuatro exconsejeros.

Shack: «Hemos encontrado despachos del CNM completamente vacíos»

El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que su institución detectó indicios de un presunto desbalance patrimonial en dos jueces y cuatro exmiembros del CNM. Es-

tos investigados por el presunto delito de corrupción y tráfico de influencias dentro del sistema de justicia.

Shack Yalta evitó dar los nombres de los jueces y exmiembros del CNM a los cuales se les halló este indicio. «De todas las personas que han sido denunciadas, como son seis altos funcionarios, efectivamente iniciamos un proceso de investigación de sus declaraciones juradas de bienes y rentas», sostuvo.

“Los Cuellos Blancos del Puerto” coparon el Callao y también querían tomar Corte de Lima

Walter Ríos era nexo de jueces con corruptos de Chim Pum Callao

«Tenemos que llegar... hasta el cielo (Lima)». «Sobre todo preparar el terreno para el año siguiente». Estas frases son parte de una conversación del detenido ex-presidente de la Corte del Callao Walter Ríos y Guido Aguila, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En el audio, ambos personajes y un tercer actor, el suspendido juez César Hinostroza, evidencian su intención de controlar la Corte de Lima y el Poder Judicial.

El audio de fecha 28 de abril además da cuenta de las componendas entre César Hinostroza y Guido Aguila para concretar la contratación de la cuñada del último, Verónica Rojas, quien hoy se encuentra detenida por graves irregularidades en su función como gerente de administración de la Corte del Callao.

Primer acto: el Callao

César Hinostroza con maniobras logró ser elegido presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao (2015-2016), el 4 de diciembre de 2014, en reemplazo de César Castañeda.

Entre los que apoyaron a Hinostroza estaban el detenido Walter Ríos y Daniel Peirano, otro juez protagonista de los audios.

CNM ayudó a Ríos

En diciembre de 2015, César Hinostroza es nombrado juez supremo por el CNM presidido por Guido Aguila y la Corte del Callao necesitaba un reemplazo. El 29 de enero del 2016 se convocó a elecciones, pero la gente de Hinostroza y Ríos no tenía mayoría y podía perder. El CNM repuso al

señor Daniel Peirano y con eso consiguieron la mayoría.

La elección se realizó dos meses después. El factor decisivo fue el traslado que hizo el CNM, con premura, desde la Corte Superior de Cañete al Callao a la jueza Emperatriz Pérez Castillo, quien apareció en la Corte justo una semana antes de la votación. Ríos ganó 10 a 8.

César Hinostroza, Walter Ríos y Guido Aguila buscan la hegemonía.

Hinostroza llama a Aguila para ofrecerle a Verónica Rojas la administración de la Corte del Callao.

César Hinostroza: ¿a Verónica le interesaría la administración del Callao?, porque al administrador lo estoy jalando a la Suprema.

Guido Aguila: Sí, hermano, sí, justamente me habló de eso, Cesar. (Luego se produce conversación de este personaje con Walter Ríos).

Walter Ríos: Ya estoy haciendo las consultas legales. Lo único que sí te voy a pedir es que la amiga converse conmigo unos diez o quince minutos (...)

Corrupción en el Callao: jueces comprometidos con «Audios CNM» aún no son removidos

Red ilícita llegó hasta el Consejo Ejecutivo del PJ
Audios revelan que el juez Hinostroza buscó favorecer con cambio de plaza a la presidenta del tribunal encargado del juicio más importante por lavado de dinero de las drogas: el caso Sánchez Paredes. Para interceder por su «gran amiga de la Sala Penal Nacional», el suspendido magistrado tuvo el apoyo de miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que hoy lidera el proceso de limpieza judicial de las cortes del Callao y Lima Sur.

Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávrry pone en la mira a fiscales que descubrieron red de corrupción

Dice que el personal de la Fiscalía del Callao es sospechoso de filtrar los audios y afectar la cadena de custodia. Pone en duda la «integridad, legalidad y conservación del material incautado», señala comunicado. En tanto, amenazan a los colaboradores y testigos de la fiscal Rocío Sánchez.

Cree que la Fiscalía del Callao filtró los CNM audios para evitar que se afecte su credibilidad y evitar que asuma el cargo.

En la inmensidad de su despacho del noveno piso del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávrry Vallejos, reacciona mal y paraliza el Ministerio Público.

Lo que es más alarmante son las decisiones de Chávrry Vallejos que ponen en riesgo la investigación a la red de corrupción judicial y electoral que descubrió la fiscal contra el crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez Saavedra.

Pedro Chávrry tardó casi medio año en citar a fujimoristas investigados

Ayer se conoció que el 3 de agosto último, Chávrry ordenó al entonces fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, «iniciar una investigación para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la filtración de los audios de las interceptaciones telefónicas» realizadas por la fiscal del Callao, Rocío Sánchez.

En medios periodísticos se interpretó como la intención de investigar y perseguir penalmente a los periodistas y medios de comunicación que difundieron los CNM audios. Solo faltó agregar los nombres de la fiscal Sánchez y sus colaboradores. Si ellos caen, es muy probable que, mientras Chávrry siga al frente del Ministerio Público, la in-

vestigación de la corrupción judicial y electoral puede irse, muy pronto, al tacho de basura.

Amenazan a testigos y colaboradores

- Los testigos protegidos y colaboradores que están ayudando a la fiscal Rocío Sánchez a completar el panorama delictivo y de conexiones que esbozan los CNM audios habrían recibido amenazas, según trascendió en medios judiciales.

- «Al menos tres colaboradores le han pedido protección a la fiscal Sánchez. Señalan que han recibido amenazas directas contra su vida o presiones contra sus familias para que cambien de versión o se retracten. La organización ha em-

pezado a reestructurarse», señala la fuente.

Ayer se conoció que el 3 de agosto último, Chávrry ordenó al entonces fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, «iniciar una investigación para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la filtración de los audios de las interceptaciones telefónicas» realizadas por la fiscal del Callao, Rocío Sánchez.

En medios periodísticos se interpretó como la intención de investigar y perseguir penalmente a los periodistas y medios de comunicación que difundieron los CNM audios.

Solo faltó agregar los nombres de la fiscal Sánchez y sus colaboradores. Si ellos caen, es muy probable que, mientras Chávrry siga al frente del Ministerio Público, la investigación de la corrupción judicial y electoral puede irse, muy pronto, al tacho de basura.

110 comunidades organizadas se oponen a la explotación y transporte de petróleo en sus territorios. Representantes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú alertan sobre comisión indígena no representativa que estaría buscando un diálogo con el Estado para exigir beneficios de la actividad petrolera. Representantes del pueblo Achuar y Wampís se reunieron del 7 al 10 de agosto de 2018 en la comunidad de Soledad, en el Distrito del Río Santiago, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas, para acordar estrategias articuladas en contra de toda actividad petrolera que se desarrolle y afecte sus territorios.

Esta articulación entre ambos pueblos indígenas surge de la necesidad de proteger sus territorios frente a los problemas que genera la explotación petrolera a en el Lote 64, en Loreto, sobre territorio Achuar; así como frente a la posibilidad del transporte de crudo por vía fluvial desde el lote hasta la Estación de Bombeo 4 (Morona), lo cual afectaría al territorio Wampís.

La empresa Geopark, socia de Petroperú, actual concesionaria del lote, está a la espera de que el Estado apruebe el Estudio de Impacto Ambiental para iniciar sus operaciones a fines de este año; mientras que Petroperú está buscando financiamiento para la ampliación del Oleoducto Nor Peruano que conecte el lote a la Estación de Bombeo 5.

Tanto la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), que congrega a 45 comunidades del Pastaza, en Loreto, como el Gobierno Territorial Autónomo (GTA) de la Nación Wampís, que congrega a 65 comunidades en Loreto y Amazonas

Pueblos Wampís y Achuar exigen anulación del Lote Petrolero 64 a ser operado por GEOPARK



Reunión de pueblo Achuar y Wampís en Soledad, Amazonas - 9 de agosto 2018 / Foto: GTANW

(16 de la cuenca del Morona y 49 del Santiago), han expresado su rechazo contundente a la actividad petrolera mediante un pronunciamiento.

"Los Wampís y Achuar somos conscientes de que el desarrollo que el mundo debe promover no consiste en continuar insistiendo en la quema de combustibles fósiles en nombre de progreso, sino en incentivar la aplicación de tecnologías alternativas", señala el pronunciamiento; a la vez que hace expresa la oposición de ambos pueblos a la empresa Geopark.

Este rechazo de la población se sustenta en las nefastas consecuencias que ha tenido la actividad en el Lote 192 (ex 1AB) en Loreto para los pueblos indígenas, quienes han

sufrido la contaminación en sus territorios durante casi cincuenta años. Los pueblos Achuar y Wampís son conscientes de lo inefectivas que son las políticas y normas ambientales en Perú, que han permitido que las empresas como Pluspetrol no cumplan con los mínimos estándares de buenas prácticas ambientales y, además, evadan sus responsabilidades de remediación.

El pronunciamiento también denuncia la creación de una comisión de supuestos representantes del pueblo wampís y del pueblo achuar que estaría dialogando con la empresa Geopark y el Estado, con el objetivo de generar conflicto dentro del territorio. "Desconocer la Comisión integrada por personas que supuestamente representan a

los pueblos Wampís y Achuar pero que en realidad es obra y creación de la empresa GEOPARK hecha para facilitar su ingreso, lo cual es una práctica típica de las empresas petroleras para debilitar la unidad de los pueblos Wampís y Achuar", se lee en el pronunciamiento.

Esta comisión estaría conformada por delegados de la cuenca del Morona que representan a un total de siete comunidades. Se trataría de los señores Rafael Mashingshi, apu de la comunidad Caballito; Abel Rengifo, comunero de Fernando Rosas y presidente de la federación de dicha comunidad; Isaías Espinar, vicepresidente de la Organización Shuar del Morona, que congrega a cinco comunidades; Adolfo Torres, comunero de Caballito; y José Alarcón, comunero de Puerto Alegre.

Según consta en la nota de prensa publicada en la página de Facebook Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, estas personas habrían llegado a Lima el 30 de julio, acompañados por el asesor indígena quechua José Fachín, a entregar una agenda a la Presidencia del Consejo de Ministros con el objetivo de "exigir un diálogo y debate político con el Estado respecto de sus derechos frente a la actividad petrolera en el lote 64"; así como a exigir que se garantice la "participación directa de los pueblos indígenas en los beneficios de la extracción petrolera... y la creación de un canon especial para la provincia del Datem del Marañón."

Sin embargo, el GTA de la Nación Wampís y la FENAP son enfáticos en señalar que exigen la "anulación del Lote 64 toda vez que el proyecto para su explotación proviene de un proceso inconcluso, premunido de prácticas de mala fe."

El extractivismo afecta la vida de las mujeres del campo perpetuando sexismo, racismo y clasismo

A nivel global se vive un alto proceso de industrialización basado en la producción de nuevas tecnologías. Países europeos y nuevas potencias económicas como China basan su posición dominante en la comercialización de estos productos, estas industrias tienen como materia prima minerales metálicos como el cobre y la plata, por ende, la producción y el consumo del Norte Global se mueve en función al control de estas materias primas.

La extracción de estas materias se vuelve entonces un proceso fundamental que los estados deben garantizar para el funcionamiento de la industria global, este proceso es sumamente violento en tanto se impone por la fuerza e impacta directamente en la vida de comunidades campesinas y las mujeres encontrando su principal fuente de legitimación en el sexismo, el racismo y el clasismo enraizados en la sociedad.[1] Históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostienen la reproducción de la vida en sus familias y por tanto en sus comunidades, los trabajos de cuidados como se les conocen, son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía, lo que es paradójico ya que ese trabajo es fundamental para el sostenimiento de la vida. Las mujeres son entonces un actor político fundamental para entender cómo se construyen las relaciones sociales desde los territorios, por tanto, son también el sector más afectado por las actividades extractivas. Por ejemplo, son muchos los casos de



mujeres contaminadas debido a que ellas son las primeras en tener contacto con los metales tóxicos que se encuentran en su entorno al intentar limpiarlos, las mujeres son las que se mantienen en mayor contacto con su ambiente y recursos como el agua, ellas verifican de primera mano cual es la situación de contaminación que afecta a los niños y niñas que están a su cuidado. Resulta entonces que la afectación de los suelos, el aire y el agua de las comunidades campesinas a causa de la extracción minera tiene un impacto diferenciado para las mujeres.

En el platón que realizaron el año pasado los afectados por metales pesados del distrito de Simón Bolívar de la región de Pasco, podíamos observar la mayoritaria participación de mujeres en esta medida de fuerza.[2] Sin duda su participación es protagónica en tanto conforman la primera línea de defensa frente a la violencia que el modelo extractivista ejerce. Es importante tomar en cuenta que la violencia que se ejerce contra las mujeres

no solo se ejerce de forma diferenciada respecto a los hombres sino que además se ve profundizada por las condiciones en las que se materializa el ser mujer en el Perú, no es lo mismo ser mujer con acceso a estudios universitarios en una ciudad que ser mujer campesina en un territorio concesionado para implementar un proyecto minero, la eficacia del proyecto extractivista se basa en la deslegitimación de la palabra de aquellos que se enuncian frente a este para denunciar los daños que genera y aquí se encuentran las mujeres campesinas en la primera línea de denuncia frente a este proyecto y sus palabras son las más deslegitimadas frente al monopolio de la verdad del discurso extractivista.

Entre otras formas de violencia que se ejerce contra las mujeres campesinas tenemos que la acumulación de riqueza que busca generar este proyecto se basa en la mercantilización de la vida, la apropiación del agua y el territorio de parte de empresas transnacionales tienen su base

en el despojo, de ahí la necesidad de que el estado genere normas para que las tierras pueden ser de fácil acceso en el mercado, así pues los sucesivos gobiernos peruanos han tenido como política el debilitamiento de las garantías legales de la propiedad comunal, por supuesto las mujeres se enfrentan a esta eficacia saqueadora de manera más profunda, a pesar de no ser las propietarias legales de las tierras son las que se encuentran en mayor vínculo con su territorio ya que son sus principales agricultoras y la agricultura es una forma de cuidar la tierra y la vida.

Hace unos meses veíamos en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, como tres mujeres eran atacadas al oponerse a la intervención de la empresa minera Glencore Antapaccay con maquinarias en sus tierras[3], las mujeres son un patrón de resistencia frente al modelo extractivista uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Máxima Acuña quien a pesar de toda la violencia ejercida contra ella y su familia, se mantiene aún firme frente a los intentos de despojo de Newmont y Buenaventura.

Sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida. Pero esta impugnación al modelo extractivista no solo se ejerce como resistencia, sino que es también alternativa, no se trata entonces de una simple negación al modelo de desarrollo hegemónico, sino que las mujeres como defensoras de la vida son la posibilidad de otra forma de desarrollo, uno que se base no en la mercantilización y el saqueo sino en el respeto a la vida, la emancipación colectiva y otra economía.

Alerta por protestas en varias localidades del corredor minero

Comuneros y comuneras de Fuerabamba vienen realizando un paro y bloqueo de carretera a la altura del ex fundo Yavi Yavi.

Su principal demanda tiene que ver con que los terrenos sobre los cuales se ha construido la carretera utilizada por la empresa minera MMG Las Bambas es de su propiedad, por lo cual han cavado zanjas y han tomado posesión del mismo.

«Desde el miércoles 22 de agosto, unas 100 personas de la comunidad de Fuerabamba han bloqueado la carretera nacional cerca de la zona Yavi Yavi, ubicada en el distrito de Colquemarka, en la región de Cusco», confirmó el portavoz de la compañía en Australia, Ted Woodruff, en declaraciones a la agencia Reuters.

«En esta etapa, no hay un impacto inmediato en las operaciones, pero se ha suspendido toda la logística de concentrados». Se supo que el día lunes 27 de agosto, se hizo presente la Policía con un número aproximado de 200 efectivos, pero hasta el momento no se habría producido ningún desalojo ni enfrentamiento.

Fuentes locales informaron que esta podría no ser la única protesta en el corredor minero en estos días. La comunidad de Pisacasa había acordado en asamblea del 21 de este mes realizar un paro hoy mismo si sus reclamos no eran escuchados por el Gobierno.

En estos momentos en dicha localidad se encuentran reunidos representantes de la comunidad con varios ministerios, entre ellos Agricultura, Transporte, Vivienda, Interior, así como la Municipalidad Provincial. La población se encuentra expectante ante la posible llegada de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros para iniciar un diálogo.

Por su parte, el distrito de Velille, ubicado en la región Cusco y que también es atra-

vesado por el corredor vial utilizado para el transporte de concentrados mineros, acordó en una asamblea popular realizada hace unos días acatar un paro indefinido a partir del próximo 30 de agosto.

Su demanda principal tiene que ver con la solicitud de modificar el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa a fin de ser incorporados como área de influencia, al sufrir los impactos ambientales de la carretera, tales como vibraciones y ruido, y polvareda constante que genera contaminación del aire por material particulado. Por último, la comunidad de Antuyo también ha expresado su voluntad de realizar un paro con demandas sobre saneamiento de la propiedad de las tierras afectadas por la carretera.

Hasta el momento no se han cumplido los acuerdos alcanzados el año pasado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Antuyo y otras tres comunidades respecto al saneamiento legal de las tierras y la compensación económica por su utilización para la vía del transporte minero. Las protestas pacíficas que viene realizando y organizando la población local tienen que ver con la falta de estudios adecuados y oportunos sobre los impactos ambientales y sociales que iba a producir la carretera en la zona.

Como ha mostrado un reciente informe, el cambio en la modalidad de transporte minero del mineroducto previsto inicialmente a la carretera que se utiliza ahora, se realizó sin contar con estudios adecuados acerca de los impactos y excluyendo a diversas comunidades consideradas inicialmente como áreas de influencia.

Por otro lado, en muchos de estos casos tanto el Gobierno como la empresa utilizaron terrenos de propiedad de las comunidades, pasando por encima de su legítima propiedad y originando conflictos.

Complot de la corrupción favorece invasión de tierras comunales

"La no titulación de las comunidades es corrupción" fue una de las declaraciones del vicepresidente de la Aidesep, Richard Rubio. Esta idea fue reforzada por el asesor Roberto Espinoza, señalando que "la ordenanza 010 del Gobierno Regional de Ucayali nace de un "complot para favorecer la invasión de tierras y perjudicar los derechos de los pueblos indígenas".

Servindi, 25 de agosto, 2018.- Una de las principales demandas de los pobladores indígenas que iniciaron un paro indefinido en la provincia Atalaya, ubicada en Ucayali, es la titulación de 51 comunidades nativas de la región.

Parte del consejo directivo y del equipo técnico de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) reiteró en conferencia de prensa que los Bosques de Producción Permanente (BPP) obstaculizan el proceso de titulación de los territorios indígenas.

AIDESEP demandó al Estado destrabar el proceso de ampliación y titulación de comunidades iniciado en 2014, pero que fue detenido en 2017 al otorgarse concesiones forestales mediante la simplificación del procedimiento de concesión.

Frente a ello AIDESEP ha venido articulando a través de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DIGESPAR) un procedimiento rector para efectuar una Anotación Preventiva aplicable a los procesos de titulación comunal que debe ser aprobado mediante una resolución ministerial.

Denuncian favoritismo

La lideresa asháninka Ruth Buendía Mestoyari, secretaria nacional de la AIDESEP, dijo que el Estado niega el derecho a los pueblos indígenas favoreciendo el otorgamiento de concesiones forestales. "Hay una irresponsabilidad del Gobierno al no garantizar el derecho territorial legítimo de nuestros hermanos indígenas de la Amazonía. Se está priorizando las concesiones forestales, la actividad minera y petrolera", alertó Buendía.

La misma opinión expresó el asesor técnico de la Aidesep, Roberto Espinoza, quien -además- dio pormenores sobre la cuestionada ordenanza regional que "favorece la invasión de tierras indígenas".

En primera instancia, mencionó que el Gobierno Regional de Ucayali carece de facultad legal para promover dicha norma. Asimismo, alertó que a través de esta se promovería actividades como el cultivo de palma aceitera y el tráfico de tierras.

"Esta ordenanza lo que hace es reabrir los límites de los BPP, las concesiones de conservación, madereras y de turismo (...) Esta apertura es para facilitar la legalización de predios individuales de migrantes y colonos", sostuvo.



Denuncian que proyecto Hidrovía Amazónica representa amenaza para 424 comunidades nativas



Dirigente Lizardo Cauper aclaró que "el avance de este proyecto debe estar condicionado al cumplimiento de todos los acuerdos de la Consulta Previa y de los acuerdos nacidos del diálogo con la Comisión Multisectorial de la Hidrovía Amazónica".

El proyecto "Hidrovía Amazónica" contempla, entre otras acciones, la ejecución del dragado en el lecho de los ríos más importantes de la Amazonía: Huallaga, Amazonas, Marañón y Ucayali; lo cual podría traer consigo riesgos socioambientales como la disminución del volumen de peces, afectando la seguridad alimentaria; el aumento de riesgo de volcaduras de pequeñas embarcaciones, perjudicando la seguridad en el transporte, entre otras afectaciones a alrededor de 424 comunidades nativas, como los Achuar, Asháninka, Awajún, Bora, Kapanawa, Kichwa, Kukama-kukamiria, Murui-muinani, Shawi, Shipibo - Konibo, Tikuna, Urarina, Yagua y Yine, advirtió el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Lizardo Cauper.

El dirigente aclaró que "el avance de este proyecto debe estar condicionado al cumplimiento de todos los acuerdos de la Consulta Previa y de los acuerdos nacidos del diálogo con la Comisión Multisectorial de la Hidrovía Amazónica".

Si bien en el 2015 se realizó un proceso de consulta previa, anterior a la firma del contrato del proyecto, AIDESEP -junto a su organización indígena base en Loreto ORPIO, han presentado una demanda de amparo solicitando la realización de un segundo proceso de consulta previa, ahora al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.

Otra de las preocupaciones de AIDESEP es el alto grado de incertidumbre en que avanza el proyecto, ya que el dragado podría afectar el comportamiento natural de los ríos, causando inundaciones en temporada de creciente o falta de agua para el cultivo de alimentos en época de vaciante; asimismo, la remoción de sedimentos del lecho de los ríos por el dragado y el aumento de la turbidez del agua podrían afectar el ciclo de los peces. El proyecto se desarrolla en zonas de graves pasivos ambientales derivados de los impactos de varias décadas de explotación petrolera.

Al respecto, la propia ministra del Ambiente Fabiola Muñoz también ha expresado su preocupación por los impactos negativos que causaría el dragado de los ríos que contempla el proyecto de Hidrovía Amazónica: "La única manera que encuentro de resol-

ver esto es con información científica por la que la investigación es la que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones de política pública", sostuvo durante su intervención en el Oslo Tropical Forest Forum 2018 en Oslo (Noruega), donde AIDESEP también participó.

Además, el vocero de AIDESEP precisó que en las zonas aledañas al proyecto se encuentra la Reserva Nacional Pacaya Samiria -de carácter intangible- así como otras cuatro zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas por el Estado, por lo cual preocupa especialmente que aún no se ha avanzado con los reglamentos de Transporte Fluvial, y de infracciones y sanciones en materia Ambiental para Transporte Fluvial, acuerdos del Acta de Consulta Previa.

Otro acuerdo de la consulta previa que aún no se ha implementado plenamente es la conformación de un comité de vigilancia ambiental, dado que hasta el momento no se conoce la planificación, roles y funcionamiento de este Comité, que debe entrar en funciones antes del inicio de las obras.

DENUNCIAN VACÍOS EN EL PROCESO

El vocero de AIDESEP expresó su preocupación ante vacíos que se estarían produciendo en el marco de la ejecución del proyecto Hidrovía Amazónica, específicamente en el Plan de Participación Ciudadana, y por la negativa del Estado de someter a Consulta Previa el estudio de impacto ambiental, que se debe presentar en noviembre.

"Es fundamental que los pueblos indígenas conozcan y se les consulte el Estudio de Impacto Ambiental, que es el documento donde se identificarán los efectos negativos, los efectos directos e indirectos, las medidas de prevención, de mitigación, y las posibles afectaciones a los derechos colectivos de las comunidades indígenas", agregó.

20 AÑOS DE CONCESIÓN

El Proyecto Hidrovía Amazónica es promovido por el gobierno peruano como parte de la cartera de proyectos de integración regional de Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento - COSIPLAN, y establece una concesión por 20 años para obras de dragado en el lecho de los ríos más importantes de la Amazonía: Huallaga, Amazonas, Marañón y Ucayali; el servicio de limpieza de "quirumas" o troncos encallados y otros que se hallan en el río; y servicios para guiar la navegación dentro del canal.

UE exige al Perú cumplir sus obligaciones en materia laboral y ambiental del Acuerdo Comercial



Paapel de la sociedad civil

Lima, de agosto de 2018.- A través de una carta oficial enviada la semana pasada al Ministro de Turismo y Comercio Exterior, Martín Valencia, la Comisión Europea expresó su preocupación por las deficiencias, registradas en el Perú, sobre la aplicación efectiva de la protección de los derechos laborales y ambientales, enmarcadas en el Título IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea (UE) y nuestro país, y anunció la llegada a Lima de una Misión de Investigación para seguir discutiendo en torno a las preocupaciones de la UE, con las autoridades y la sociedad civil.

Asimismo, la Comisión Europea manifestó estar preocupada por las deficiencias en la aplicación efectiva de los Convenios de la OIT 87 y 98, sobre libertad de asociación y protección de los derechos de sindicación y negociación colectiva, que siguen sin abordarse a pesar de las recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT. Además, señaló que Perú tiene uno de los niveles más altos de informalidad en el mercado laboral y el alto nivel persistente de trabajo infantil sigue siendo una gran preocupación. Resaltando que estos temas han sido el centro de las discusiones entre las partes en los últimos años sin que haya habido mayores avances al respecto. «Todos estos temas han sido el centro de las discusiones en el Sub Comité sobre Comercio y Desarrollo Sostenible durante los últimos cinco años y aún se necesitan más esfuerzos para lograr un progreso sustancial», señala la Comisionada Cecilia Malmström en la mencionada carta.

En materia ambiental, la comisionada enfatizó que la simplificación de los procedimientos administrativos en materia ambiental no debe conducir a una disminución del nivel de protección de estos derechos.

La comisionada exhorta al Perú a no solo mejorar en las áreas de preocupación mencionadas en base a un plan de acción «bien definido y de duración determinada», sino que afirma que la presentación de dicho plan de acción se debe compartir con la Comisión Europea antes de la reunión del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible a realizarse en Guayaquil en noviembre próximo, como señal de un compromiso político por parte del Perú. Dice, asimismo, que si no hay un progreso suficiente, la Unión Europea considerará el uso de los mecanismos existentes, incluido el procedimiento de ejecución para abordar los problemas identificados. Para verificar el avance en estas medidas, llevará a cabo una misión de investigación a Lima el último trimestre de este año.

También se pronunció sobre la participación de la sociedad civil y aseguró que no tienen una indicación clara de la composición de los mecanismos nacionales existentes, la frecuencia de sus reuniones o si han discutido la implementación de este Título.

«Mis servicios señalaron este problema a las autoridades peruanas en muchas ocasiones, incluso durante la última reunión de Sub Comité sobre Comercio y Desarrollo Sostenible y Comité de Comercio en noviembre de 2017 en Lima. Esta preocupación también se planteó en un informe presentado a la Comisión Europea en octubre de 2017 por organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas con sede en Perú», acotó la funcionaria europea en la carta.

Las organizaciones peruanas que vigilan el cumplimiento del Acuerdo Comercial y agrupadas en el Grupo Consultivo Interno Perú y las organizaciones que presentaron la queja saludaron la carta, que recoge los aspectos más críticos de la queja por falta de cumplimiento de sus compromisos laborales y ambientales previstos en el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea presentada ante la Unión Europea en octubre de 2017; asimismo anunciaron que solicitarán en los próximos días reuniones con las autoridades peruanas para conocer el plan de acción que planteará el Estado.

Asociación Nacional de Centros (ANC), Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), CooperAcción, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Equidad. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP), Federación Nacional de Trabajadores del Agro (FENTAGRO), Federación Nacional de Trabajadores Textiles, Confecciones y Afines del Perú (FNTTP), Fomento de la Vida (FOVIDA), Foro de la Sociedad Civil en Salud (FOROSALUD), Género y Economía. Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), Instituto del Bien Común (IBC), Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), Red Muqui Perú, Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Red Uniendo Manos Perú, Sindicato Único de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)

Perú Medidas de Vizcarra refuerzan el modelo extractivo y apuntan a desaparecer territorios colectivos

Vizcarra no ha informado respecto de las implicancias del nuevo paquete normativo de fiestas patrias que acaba de dictar. Se continúa favoreciendo con medidas tributarias a las empresas con contratos de estabilidad jurídica, entre ellas empresas mineras, que operan por años en el Perú, y que generan importantes utilidades que no se quedan en el país.

Nuestra legislación no se adecúa en materia ambiental y social a los estándares y recomendaciones internacionales emitidas por la OCDE y GAFI, y sólo se hace en materia económica y financiera. La modificación del marco normativo de Defensa Pública no se incluye medidas para optimizar los servicios también en favor de las/los defensoras/es de derechos humanos y ambientales, que sólo defienden sus territorios y derechos colectivos del despojo y la imposición de actividades extractivas.

No se establece la potestad sancionadora del Ministerio de Cultura (MINCUL), no sólo al marco normativo de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial – PIACI, que es importante, sino que también debe incluir sanciones ante el incumplimiento del art. 89 de la Constitución sobre Comunidades Campesinas, a la ley 29785, ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, y a la Ley 24656, ley de Comunidades Campesinas, todas ellas respecto al respeto de la autonomía, la disposición de las tierras, y la aplicación de la consulta previa a nuestras comunidades campesinas y nativas, que buscan ser eliminadas con las normas vigentes en el Perú.

Respecto al nuevo paquete normativo, resaltamos que se establezca que la simplificación administrativa no debe generar la reducción o eliminación de derechos ni requisitos sustantivos, como ha venido sucediendo durante los últimos gobiernos incluido el del ex presidente Kuczynski. En este gobierno se siguen dictando normas que son parte de un nuevo paquete normativo, un ejemplo de ello es el Decreto Legislativo 1366 que amplía las funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), para tomar decisión sobre bienes inmuebles públicos y privados en favor de obras o proyectos, sin necesidad de que haya una previa declaración de éstas como de necesidad pública, interés nacional y/o de gran envergadura. Incluso establece que, en el caso de procesos judiciales seguidos contra el Estado, la autoridad jurisdiccional «debe» solicitar la opinión de la SBN de manera previa a la emisión de la sentencia o medida cautelar respectiva, afectando el principio de independencia de la función ju-

risdiccional.

Como parte del paquete normativo, el Decreto Legislativo Nro. 1360 ha precisado funciones específicas del Ministerio de Cultura (MINCUL) como ente rector en materia de pueblos indígenas u originarios en el Perú, supuestamente en base a recomendaciones realizadas por la OCDE. Se precisa que es el Viceministerio de Interculturalidad, como ente exclusivo de establecer el reconocimiento de los Pueblos Indígenas u originarios – PPII, el encargado de «establecer los lineamientos para dicho reconocimiento». Con ello se deslegitima el rol de gobiernos regionales que ya han realizado dicho reconocimiento, el que ha sido objetado por el MINCUL con procesos de inconstitucionalidad. Se evidencia que continúa el afán de poner trabas desde el Estado a nuestras comunidades campesinas y nativas en la defensa de sus territorios, frente a la imposición de actividades económicas que afectan sus modos de vida y no impulsan alternativas de desarrollo sostenibles, y más bien se favorece a los poderes económicos, lo que sigue generando conflictividad social en el país.

Si bien el Decreto Legislativo 1366 reconoce que la Base de datos de PPII, no es constitutiva de Derechos porque «puede» haber otros pueblos que no estando en ella, pero pueden ejercer sus derechos colectivos, también en su segunda disposición complementaria final establece que está Base es fuente de información para que los diferentes niveles de gobiernos dicten políticas públicas sobre PPII, es decir lo pueden hacer solo en tanto dicha Base de datos, o sea para las comunidades que están en dicha base, lo que es restrictivo justamente.

Finalmente, hay que sumarse al clamor popular respecto del gran problema de la corrupción en el Perú, que ahora se ha evidenciado en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y que también debe considerarse como ha afectado también a defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales a nivel nacional, por el hecho de defender sus derechos colectivos y de propiedad. La corrupción alcanza también a las puertas giratorias, y como los funcionarios de las empresas pasan a ser funcionarios públicos, facilitando favores a las empresas con aprobaciones de estudios ambientales y dictando normas que luego las benefician en el sector público para luego ser beneficiados con puestos en otras empresas. Situación similar terminó con su antecesor fuera del gobierno y se requieren medidas concretas que acaben con éste mal que carcome a nuestro país, para lograr la paz y justicia social que todas y todos anhelamos.



Paro en Atalaya: ¿por qué piden derogar ordenanza sobre BPP?



Una de las peticiones de los manifestantes indígenas es derogar una ordenanza regional que, aseguran, favorece la entrega de concesiones forestales en sus territorios.

Por Meylinn Castro

Servindi, 23 de agosto, 2018.- Ya pasaron ocho días desde que se inició un paro indefinido en la provincia de Atalaya

, ubicada en la región Ucayali. Una de las peticiones de los miles de manifestantes indígenas es anular la Ordenanza Regional 010-2018 que, según afirman, vulnera sus derechos territoriales al favorecer la entrega de concesiones forestales a terceros.

«Se está negando el derecho legítimo del pueblo que quiere que se le otorgue el reconocimiento de posesión (...) Pedimos que se asegure y garantice el territorio de las comunidades indígenas», enfatizó la lideresa asháninka Ruth Buendía en una entrevista para radio Exitosa.

Buendía —quien además es una de las voceras del paro y directiva de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)— señaló que existen 51 comunidades nativas que están en proceso de titulación en Ucayali. Estas se verían afectadas por la ordenanza publicada el 22 de junio último.

"Se está negando el derecho legítimo del pueblo que quiere que se le otorgue el reconocimiento de posesión (...) Pedimos que se asegure y garantice el territorio de las comunidades indígenas", enfatizó la lideresa asháninka Ruth Buendía en una entrevista para radio Exitosa.

Buendía —quien además es una de las voceras del paro y directiva de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)— señaló que existen 51 comunidades nativas que están en proceso de titulación en Ucayali. Estas se verían afectadas por la ordenanza publicada el 22 de

junio último.

¿De qué manera la ordenanza vulnera los derechos de los pueblos indígenas de la región?

Pero ¿de qué manera esta ordenanza vulnera los derechos de los pueblos indígenas de la región? ¿Por qué los protestantes exigen su anulación?

Para responder estas interrogantes, Servindi dialogó con Waldir Azaña, técnico del Centro de Información y Planificación Territorial (Cipta) de la Aidesep.

De acuerdo con el especialista, esta norma alentaría la depredación de los bosques ubicados, principalmente, en los territorios ancestrales de las comunidades nativas con actividades como la extracción de madera y el cultivo de palma aceitera.

"Lamentablemente, hay un alto grado de tráfico de tierras en la región Ucayali y con esta norma se está abriendo la frontera para que los colonos migren hacia los bosques, se posesionen y deforesten", remarcó.

Obstaculización de los BPP en la titulación Durante la conversación, Azaña recordó el obstáculo que genera los Bosques de Producción Permanente (BPP) en el proceso de titulación de las comunidades nativas de la región.

En tal sentido, manifestó que estos son los causantes de que 39 comunidades de la provincia de Atalaya aún no tengan título de propiedad.

"El proceso de titulación de estas comunidades se detuvo, porque el [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] Serfor no redimensiona los Bosques de Producción Permanente", enfatizó.

Tomando en cuenta estas graves consecuencias, aseveró que los derechos territoriales de los pueblos indígenas están amenazados con esta norma. Asimismo, informó que los indígenas esperan soluciones frente a esta y sus otras demandas.

Comunidades wampis de Loreto rechazan ingreso de petrolera Geopark en el Lote 64

Los wampis están en Amazonas y Loreto.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis señaló en un pronunciamiento que autoridades de las comunidades del distrito de Morona, en Loreto, han informado sobre el ingreso de miembros de la empresa Geopark a las comunidades Arutam y Mayuriaga donde crearon una comisión de representantes de las poblaciones nativas sin tener en cuenta a la organización de la nación wampis.

En el documento afirma que la empresa pretende que esta comisión realice viajes a Lima, con gastos facilitados por la petrolera, para que respalde la actividad hidrocarbúfera en sus territorios, ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otras entidades públicas. Y agrega que también quiere utilizarla en campañas de convencimiento y reclutamiento de líderes en las comunidades.

Anota que este proceder «indica que no es una empresa seria, ni mucho menos respetuosa de la institucionalidad de los pueblos indígenas, lo que significa que así de indiferente va a actuar en nuestros ríos, bosques y

tierras en perjuicio del sistema de subsistencia colectiva de la población en general y muy especialmente de los Wampis. Esto es muy grave por cuanto Geopark es socia de Petroperú en el lote 64».

Ante esta situación, y tomando en cuenta las consecuencias negativas de la actividad petrolera en las cuatro cuencas loreanas, la organización indígena decidió rechazar «rotundamente la comisión creada por la empresa y toda actitud disociadora que viene adoptando para debilitar a las comunidades». También alertó a las autoridades de la PCM, del Ministerio de Cultura y otras entidades estatales a que no se dejen sorprender por personas que no cuentan con el aval de la nación Wampis.



Minería y caminos destruyen más de 23 mil hectáreas de bosque en menos de un año

Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín son las regiones con mayor índice de deforestación. La devastación se vincula a la apertura de caminos forestales y a la actividad minera.

Servindi, 5 de agosto, 2018.- La Amazonia peruana perdió más de 23 mil hectáreas de bosque durante el primer semestre del año, según informó el programa nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (Minam).

Hasta junio de este año, las principales pérdidas se registraron en las regiones de Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín, representando el 71 por ciento de la devastación total de la Amazonía.

De acuerdo a la información del Minam, la primera región perdió cerca de 5500 hectáreas mientras que el territorio madrediosense, 4300. Se estima que la devastación de los bosques de Ucayali y San Martín suma 6700 hectáreas.

La principal causa de la deforestación es la agricultura migratoria y la ganadería. La minería y tala ilegal son otras de las actividades que amenazan a la Amazonía.

Casos representativos

El informe señala la existencia de tres casos representativos de pérdida de bosques por la deforestación. El primero es a causa de la plantación de arroz, ocurrido en el distrito Nueva Requena, Ucayali. Esto generó la deforestación de cerca de 50 mil hectáreas. El segundo caso se debe a la apertura de caminos forestales en el distrito Contamana, Loreto, representando la pérdida de más de 4 mil hectáreas en áreas establecidas como Bosque de Producción Permanente (BPP).

Y, el último reporta la deforestación por la actividad minera en el distrito Inambari, Madre de Dios, que afectó más de 300 mil hectáreas de bosques, ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

Desaprobación de Keiko Fujimori llega a 81%, según encuesta de Datum

La lideresa fujimorista siete puntos porcentuales en el último mes (14%) y logró el 81% de desaprobación de los peruanos. Su popularidad más alta está en el norte, con apenas 22%, en el oriente, con 19%, y en el segmento E con el 18%.

Una última encuesta nacional de Datum para Perú21, arrojó que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, registró un

nuevo mínimo en su nivel de aprobación en 18 meses. La hija mayor de Alberto Fujimori cayó siete puntos porcentuales el último mes (14%), al alcanzar el 81% de desaprobación de los peruanos. Su popularidad más alta está en el norte, con apenas 22%, en el oriente, con 19%, y en el segmento E con el 18%.

Respecto de su desaprobación, esta se ha acentuado en los segmentos A/B y en el sur del país, con 91% en ambos casos. En Lima y Callao el rechazo a su papel como cabeza de la oposición alcanza el 86%. Así, se confirma la tendencia de descenso de la popularidad de Keiko Fujimori, desde diciembre del año pasado, cuando indultaron a su padre.

Su partido tampoco se salva de esta caída. La encuesta muestra que el rechazo a Fuerza Popular aumentó 20 puntos porcentuales en el último año. Las críticas y los cuestionamientos a su lideresa por sus presuntos nexos con el suspendido juez César Hinostroza, protagonista de los audios de

corrupción y tráfico de influencias en el sistema judicial, han influenciado en este descenso, según el estudio.

En una de las grabaciones, Hinostroza y su interlocutor, el detenido empresario Antonio Camayo, coordinan una entrevista con un personaje al que llaman la 'señora K', de la 'fuerza número uno'. A pesar de que todo

apuntaría que el magistrado se refiere a ella misma y a su partido, Keiko Fujimori ha negado una y otra vez que se haga alusión a su nombre. Pero las evidencias aumentan cuando Hinostroza se ha encargado de la casación presentada por la lideresa de Fuerza Popular en el marco de la investigación del caso cócteles, por lavado de activos.



IV ASAMBLEA MACRO SUR SE REALIZARÁ EN PUNO EL 15 DE SETIEMBRE

Dirigentes de las organizaciones sociales de la macro región sur del país, están convocando a la "IV asamblea macro sur" con carácter nacional que se realizará en la ciudad de Puno, el próximo 15 de setiembre.

El punto central a tratar es la propuesta de la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución Política, para ello determinar

la perspectiva de lucha, indicaron los representantes.

Esta reunión es acuerdo de la III asamblea macro región sur que se realizó el pasado fin de semana en Moquegua con participación de todos los sectores, organizaciones populares, sociales, gremios y pueblo peruano en general del sur del Perú.

China:

Habitantes de Shanghái duermen en las calles por el intenso calor

Bancas del parque o la acera de la calle se ha vuelto la 'cama' de muchos. La ola de calor que golpea Shanghái este verano llevó a algunos ciudadanos a dormir en los bancos y aceras de una de conocida arteria comercial de la ciudad china, en busca de un poco de brisa, agotados por el asfixiante calor.

Desde hace varias semanas, una larga e inusual ola de calor golpea Shanghái, con los termómetros superando los 35° C el jueves, por 16° día este verano. Los apartamentos de los edificios residenciales del centro de la ciudad, de construcción antigua, no suelen estar equipados con aire acondicionado. Y aunque lo estén, muchos habitantes con sueldos limitados intentan no utilizarlo permanentemente para evitar que se dispare la factura de la electricidad.

Hacia las 4:00 de la madrugada del

jueves, al menos un centenar de personas -entre ellas mujeres y niños, pero sobre todo hombres con el torso descubierto- dormían al borde de la calle Nankin.

Una brisa nocturna llegada del cercano río Huangpu refrescaba ligeramente el ambiente, aliviando a los durmientes tumbados sobre mantas o periódicos. Algunos habían instalado un campamento provisional en la plaza del Pueblo, donde se encuentra el principal parque de la ciudad, o roncaban acurrucados delante de los escaparates de las tiendas de lujo.

Para algunos, la «cama» era poco más que un pedazo de acera, donde dormían directamente en contacto con el suelo, sin camisa y descalzos, una botella de agua y un panecillo chino a su lado.

Estas últimas semanas, los habitantes



de Shanghái corrieron hacia las estaciones de metro, los centros comerciales, las bibliotecas, y otros lugares públicos climatizados para escapar del agobiante aumento de las temperaturas.

El fabricante de muebles IKEA es igualmente un destino predilecto, donde se puede ver a los visitantes agotados echarse una siesta en las camas y

sofás de la tienda con aire acondicionado.

El verano pasado, Shanghái experimentó un récord de temperaturas, alcanzando los 40,9° C, y ocho de las doce temperaturas más fuertes experimentadas en la ciudad durante el siglo pasado fueron registradas durante los últimos cinco años, según la oficina meteorológica municipal.

Un bloque de 6 mil km se ha separado de la Antártida y se está moviendo hacia el Océano Atlántico

En la noche del 12 de julio, la mayor de las plataformas de hielo Larsen se separó de la Antártida, cubriendo un área de aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados. Esto es informado por el sitio de la Universidad de Swansea en Gales.

Se informa que el iceberg se ha convertido en el más grande en la historia de las observaciones. Anteriormente, funcionarios de la universidad advirtieron que romper un bloque de hielo resultaría en la pérdida de una décima parte de todo el glaciar.

«La formación del iceberg tuvo lugar entre el lunes 10 de julio y el miércoles 12 de julio», dijeron los científicos.



La grieta se notó por primera vez en 2011, en 2014 comenzó a crecer rápidamente. Los científicos señalan que

ahora las corrientes y los vientos se refieren a un iceberg que se separa en el Océano Atlántico.

Según lo informado por «País», anteriormente la NASA capturó en video, ya que desde la Antártida, un iceberg se rompió un poco menos de 30 kilómetros cuadrados.

Más temprano en un glaciar en la Antártida también se divide un iceberg en el hielo de la Antártida Nansen, 50 km de la estación de investigación de Corea del Sur llamado Jang Bo Go. El espesor de las placas de hielo gigantes, han empezado a desintegrarse en dos grandes fragmentos en diferentes lugares de 100 a 900 metros con un área - 205 metros cuadrados. km. En comparación, el área de Odessa es de 236.9 kilómetros cuadrados.

Venezuela: Arco Minero podría ser el desastre ecológico más grande de América Latina

En 2016, el gobierno venezolano emitió un decreto convirtiendo cerca de 112.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica en un distrito minero especial, llamado Arco Minero. Nicolás Maduro prometió que el Arco Minero traería prosperidad económica y “desarrollo minero ecológico”.

Pero, en cambio, parece ser el mayor desastre minero y ecológico de América Latina, ya que la minería incontrolada y primitiva en la región está causando estragos en comunidades vulnerables, degradando ecosistemas y dañando la increíble biodiversidad de la región, que incluye desde jaguares y armadillos hasta unas 850 especies distintas de aves. El saqueo de Venezuela de sus pro-

prios recursos y la correspondiente devastación ambiental no reciben la atención nacional e internacional que deberían.

Pero por primera vez, en julio, el Arco Minero fue tratado en una plataforma regional importante: el Congreso de la Sección Latinoamericana y del Caribe de la Sociedad para la Biología de la Conservación (LACA-SCB), que es la comunidad de profesionales de la conservación más grande del mundo. Gobierno venezolano rechaza “desconocimiento” del atentado por parte de la UE

Durante el evento, celebrado en Trinidad y Tobago, LACA-SCB acordó una declaración de la conferencia sobre el Arco Minero: El comienzo de la declaración dice:

“En el Escudo Guayanés de Venezuela y la Cuenca Amazónica, incluyendo todos los territorios al sur del río Orinoco y su delta, se genera un área de importancia regional crítica para la conservación de la diversidad biocultural. Entre 2000 y 2015, la deforestación allí se ha incrementado exponencialmente debido en parte a la intensificación observable de las actividades humanas en el norte del estado de Bolívar, un “punto clave” de metales preciosos y minerales como oro, diamantes, hierro y coltán, entre otros. La mayoría de estas actividades están directa o indirectamente relacionadas con un aumento de las prácticas informales de extracción de oro, que afectan áreas protegidas y territorios indígenas”.

Hasta ahora, se han hecho pocos intentos para estudiar los impactos actuales y futuros del Arco Minero, pero los primeros indicadores son alarmantes. Juan Carlos Amilibia, biólogo de la Universidad Central de Venezuela, explica que la Amazonía venezolana está cada vez más deforestada y que la minería se está convirtiendo en una de las mayores amenazas para la biodiversidad. “El gobierno debería hacer esfuerzos para controlar la minería ilegal donde antes no había deforestación, en lugar de crear nuevas zonas de extracción y extracción”, dice citado por el Eathr Island Journal.

Fuente: <http://www.venezuelaaldia.com/2018/08/11/>

Pañuelos Verdes por el aborto legal, seguro y gratuito

Argentina fue estremecida por una formidable movilización nacional de mujeres por su derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

El símbolo del pañuelo verde tuvo su origen en 2003 en Rosario y durante la Campaña Nacional por el derecho al Aborto se repartían 8 mil al año en todo el país. Hoy, su producción superó los 200 mil. En el interior del país destacaron Jujuy y Catamarca.

El 8 de agosto en más de 28 ciudades del mundo se sumaron al Pañuelazo internacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina y reivindicando el mismo derecho en los países donde aún está penalizado.

Hubo pañuelazo en Caracas, Bogotá, Montevideo, República Dominicana, Japón.

Reproducimos algunas de las convocatorias:

Marcha en Río de Janeiro, Brasil: "¡Por la vida de las mujeres vamos a ocupar Río de Janeiro con una marea verde el 8 de agosto!"

San Pablo, Brasil.

La Paz, Bolivia.

Ciudad de México, México: miércoles 8 de agosto, 16 hs. en el Ángel de la Independencia.

San José de Costa Rica, Costa Rica.

San Juan de Puerto Rico, Puerto Rico:

El próximo 8 de agosto nos sumamos al Pañuelazo Internacional en solidaridad con las mujeres en Argentina por aborto legal y seguro.

Por Colectiva feminista de La Luna con gatillo: "Queremos estar a la altura de un universo sin respuestas.

Nuestra insistencia tiene un carácter de apropiación de nosotras mismas y su legitimidad viene justificada por el hecho de que en cada laguna nuestra siempre se ha introducido alguien que ha sido más veloz para apropiarse de nosotras.

Argentina:

Imagen pública del presidente Macri sigue cayendo por crisis económica

La popularidad del presidente argentino, Mauricio Macri, sigue descendiendo debido a las turbulencias económicas en el país, revela una nueva encuesta.

La aprobación de la gestión de Macri se encuentra en el 35,9 %, en un significativo descenso desde el 71,3 % que ostentaba cuando asumió la Presidencia de Argentina en diciembre de 2015, desvela un nuevo sondeo elaborado por la consultora Rouvier & Asociados.

La encuesta —realizada a nivel nacional entre los pasados 1 y 22 de agosto y divulgada este viernes— detalla que la imagen negativa del mandatario argentino llega a un récord del 59,9 % y la desaprobación entre los encuestados es tal que incluso supera a la de su principal rival política, Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

A juicio de la consultora, esta caída se debe al caso de los «cuadernos de las coimas»,



Nos interesa el punto más interno que cada una tiene en común con las otras y que para todas es tan vivo y doloroso." "El camino es hasta vencer, y de eso sabemos quienes día a día enfrentamos la doble opresión del patriarcado y del capital sobre nuestros cuerpos, nuestros proyectos y nuestros deseos. Por eso sabemos que la revolución será feminista o no será."

"El reclamo por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito en el hospital se volvió una realidad estridente en el transcurso de los últimos meses. Las personas con capacidad gestante hemos estado ocupando masiva e indiscutiblemente el espacio público. La opinión pública se vio obligada a prestar atención a un reclamo que exige la autonomía sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros placeres. Queremos vivir en libertad y sin violencias: estamos decididas a ser protagonistas del repliegue paulatino pero inexorable del machismo y el patriarcado de todos los ámbitos, desde los más íntimos a los más colectivos."

"Las trabajadoras precarizadas; las despedidas; las trabajadoras de la economía popular; las sindicalizadas (a las que los

gremios les dan la espalda); las travestis; lesbianas; transexuales; las presas; las trabajadoras sexuales; las organizadas; las autoconvocadas. La agenda feminista ha logrado probar que circulan otras racionalidades posibles a la hora de pensar estrategias de transformación de la realidad. El marco de unidad se mantuvo claro; y cada sector del feminismo habilitó, en sus propios territorios, diferentes propuestas de lucha, discusiones y proyecciones a futuro. Nos hemos construido espacios a dentelladas, demostrando que allí donde el patriarcado señala inmovilidad o silencio, hay un burbujeo incesante, una red tejiéndose, un orden subvirtiéndose."

"La respuesta reaccionaria de los sectores antiderechos rápidamente ha mostrado el lado más rancio de una sociedad cuyos resquicios conservadores se conjugan con el peor aspecto de las políticas neoliberales que vienen diezmando las

conquistas populares logradas históricamente. El feminismo denuncia la violencia de los sectores que apañan el aborto clandestino y de esa forma visibiliza lo nefasta que puede ser la reacción frente a procesos de transformación. Y también ha facilitado estrategias de cómo hacer para cambiarlo todo. Urge entender que el movimiento feminista no es una moda, es un dato de la realidad actual que ofrece proyecciones y posibilidades para quienes pujamos por un mundo donde vivamos libres de toda opresión."

"Que sea ley. Pero vamos por todo."

"Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal para decidir."

Hubo pañuelazo en Madrid frente a la embajada argentina.

Distintas ciudades en todo el país se sumaron a la "Marea Verde": Córdoba, Tucumán, Neuquén, Corrientes, Gualeguychú, Entre Ríos. El pañuelazo llegó a la Patagonia. En Catamarca, el verde invadió las estatuas.

En Ecuador cientos de ciudadanos, entre hombres, mujeres e incluso niños, se concentraron en las inmediaciones de la Embajada de Argentina en Quito.

Por la presión popular la Cámara de Diputados votó en favor de la propuesta. En cambio en la Cámara de Senadores la propuesta perdió por 38 senadores que votaron en contra.

La marea verde vigorosamente afirma:

"38 VOTOS NO ACALLAN MÁS DE 2 MILLONES DE VOCES EN LAS CALLES"

Venezuela: Rechazo al Arco Minero se une a las protestas por falta de agua

(De Servindi)

Activistas de diversas organizaciones sociales autoconvocadas por la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco rechazaron la contaminación de los acuíferos y la afectación del derecho al agua y la energía de los venezolanos.

La acción directa se realizó desde muy temprano del sábado 28 de julio en la Plaza Brion de Chacaíto y superando las dificultades del transporte en Caracas.

La actividad del «Baldazo» comenzó con cantos colectivos y entrega de información a los transeúntes interesados en conocer los motivos de la protesta.

Prosiguió con una caminata por el boulevard de Sabana Grande, para finalizar con gran alegría en la plaza Brion, con un baile en parejas y en grupo, a la que han denominado #Bailatesta #ContraelAMO y #PorederechoalAgua.

La música salsa sonó fuerte y alegre para expresar el descontento y la rebeldía como corresponde a lo mejor de este género tan popular.

Cabe destacar que las organizaciones sociales reivindican como suyo el baile callejero y contestón, al igual que la canción popular, para decirle al poder que la calle les pertenece por derecho y apropiación colectiva.

El Arco Minero amenaza al país

"La protesta cívica por el derecho a los servicios, a la salud, a la seguridad, contra la violencia y a un ambiente sano está relacionada directamente con la implementación de este eco-etnocidio al

sur del país" sostuvo otro manifestante.

"La escala en que está prevista la contaminación de los acuíferos mas importantes del país hará inviable el servicio sostenido de agua para la mayoría de los venezolanos" declaró uno de los manifestantes.

El Arco Minero del Orinoco sacrifica las posibilidades, dignidad y calidad de vida sostenibles en el futuro. Representa la condena estratégica al derecho a los servicios de agua y energía para las mayorías venezolanas.

Además, "el modelo establecido en esta explotación suprime los derechos democráticos y humanos de modo permanente, violando la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales suscritos por el estado venezolano".

Otro de los activistas agregó "En el Sur, los cuerpos de seguridad del Estado se gobiernan como los pranes del crimen organizado y los grupos armados y ese es el modelo que está escalando aceleradamente en todo el territorio nacional".

"es el modelo de una economía de enclave extractivista, donde la corrupción es el mejor socio de las grandes empresas que ambicionan los minerales que ahí se están explotando" agregó.

"Las primeras víctimas son los pueblos indígenas, criminalizados por el propio gobierno para desplazarlos de su territorios y subordinarlos a las mafias que controlan las minas" declaró un vocero de la organización Wainjirawa.

Ello, en referencia a las declaraciones dadas recientemente por un vocero militar en las televisiones del estado acusando de secesionista al pueblo Pemón.



En la víspera de la celebración del II Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México (28/VII/2018), en Oxchuc, Chiapas, se hicieron diversos preparativos para invocar la armonía y la concordia. La noche del viernes 27 de julio, en la iglesia principal, durante varias horas los ancianos oraron e imploraron por la paz. Con el silencio de la noche y en medio del copal, sahumerio y velas, los Mayores invocaron a sus dioses para recibir a sus visitantes. Sus buenos deseos y bendiciones propiciaron que el Encuentro Indígena se desarrollara en paz y en armonía comunitaria.

Fiel a la costumbre del pueblo, por la mañana del sábado 28 de julio, recibió a sus visitantes con tambor, arpa y cohetes. Un gran acontecimiento fue la llegada de Jesús Ramírez (vocero del electo Presidente de la República), María Luisa Albores (futura Titular de SEDESOL) y Adelfo Regino (próximo Titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas). La comitiva del gabinete social de la Presidencia de la República llegó acompañada de representantes indígenas de Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Estado de México e Hidalgo.

Previo al inicio para escuchar las intervenciones, los visitantes fueron venerados y reverenciados con la vestimenta tradicional de la comunidad tzeltal. Don Juan Encino, presidente de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc, lo explicó con sus siguientes palabras: «es un símbolo de respeto y es una costumbre de los abuelos, que al usar nuestra ropa tradicional queremos que sientan y amen nuestra lengua y nuestra cultura. Es tradición ancestral de nuestra comunidad y es la herencia que recibimos de nuestros abuelos».

Una vez explicado el anterior preámbulo cultural, procedo a reseñar los principales mensajes. Ma. Luisa Albores enfatizó que en Oxchuc es la primera visita que hicieron a nombre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente electo de la República. También destacó su ascendencia tzeltal y recaló que Ococingo es su pueblo natal. Resaltó que la SEDESOL dará prioridad en «sembrar ciudadanía» y que la nueva política social será participativa, incluyente y democrática.

Jesús Ramírez, en su calidad de próximo vocero de la Presidencia de la República, se acercó a varios temas cruciales de Oxchuc, Chiapas y de México. «Pronto se mandará al Congreso de la Unión una propuesta de reforma constitucional que recoja los 'Acuerdos de San Andrés Larraínzar'. Necesitamos cimentar un México sin más pobreza, violencia ni discriminación y reconstruir la unidad de los pueblos para levantar una voz digna. Queremos que Oxchuc tenga su 'tres nudos' unidos, no separados».

El representante del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) quedó sorprendido cuando Jesús Ramírez afirmó: «Nunca más un dictamen antropológico para dictaminar si un pueblo indígena es o no lo es». Este es uno de los requisitos que ha obstaculizado el ejercicio de los derechos del pueblo de Oxchuc para celebrar elecciones por el Sistema Normativo Propio, también conocido por «Usos y Costumbres». Este requisito ha representado un impedimento para el ejercicio del derecho de autogobierno indígena.

Cualquier visitante que llega a Oxchuc siente el palpitar del corazón indígena del pueblo. El 99.9% de su población es de origen tzeltal. Sus costumbres, lengua, tradición, historia, organización social, cohesión comunitaria, cosmovisión y su territorio ancestral lo hacen reconocer como un pueblo histórico de tradición centenaria. Para los que tengan duda, consulten el «K'awaltic: Las ordenanzas de Oxchuc», que contiene la memoria histórica con más de cuatro siglos de la crónica del poblado y comunidades conexas.

México: Oxchuc y su proceso de autogobierno municipal



La intervención de Adelfo Regino colocó en el centro del debate los temas de mayor preocupación para el municipio de Oxchuc. Para explicar la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, citó textualmente el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

«Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural».

Las comunidades, pueblos y municipios indígenas, pueden ejercer este derecho establecido en el marco del derecho internacional y los derechos consagrados en el artículo 2° de la Carta Magna. Temas como el autogobierno, la autonomía y libre determinación, están contemplados en nuestra Constitución Política. En este contexto, fueron ilustrativas las experiencias de los municipios indígenas de Cherán (Michoacán) y Ayutla de los Libres (Guerrero), quienes en la práctica ejercen los derechos en referencia.

Al igual que Jesús Ramírez, Adelfo Regino reiteró que en Oxchuc no es necesario un peritaje antropológico para determinar el reconocimiento de su composición indígena. «Basta que se exprese la voluntad popular a través de un acta de Asamblea Comunitaria, en la cual se haga constar que Oxchuc se reconoce como un pueblo tzeltal. Que se escuche la voz del pueblo y que ellos decidan con qué régimen electoral quieren nombrar a sus autoridades municipales. Que los partidos políticos respeten los sistemas electorales de los pueblos indígenas».

Entre los más de 20 mil indígenas congregados en la plaza pública de Oxchuc, había cientos de milicianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y desde el alto parlante los mensajes se esparcieron hacia el cercano territorio zapatista. Por ello fue importante insistir en la imperiosa necesidad de cumplir con los «Acuerdos de San Andrés Larraínzar». El mensaje para Oxchuc, Chiapas y México «es alzar la voz por la vida de la paz. Conciliar y reconciliarse entre los pueblos, construir diálogo y acuerdos entre las partes. El camino en armonía de Oxchuc debe ser el camino de los pueblos indígenas de México».

Nuestra presencia en el ancestral territorio del pueblo Maya Tzeltal, fue posible gracias a la gentil invitación de Xun Juan G. Méndez, quien abrió las puertas de su comunidad para recibir a parte del gabinete social del próximo Presidente de la República. Propiciar el diálogo y abrir las puertas de Oxchuc es abrir la esperanza a más pueblos y municipios de los Altos de Chiapas.

Xun G. Méndez es sobreviviente de la masacre del 24 de enero del año en curso. En aquel fatídico jueves, Oxchuc fue atacado

por un grupo armado. En esa incursión fueron cobardemente asesinados Obidio López Santiz, Francisco Méndez López y Víctor Gómez Santiz. La exigencia de justicia y castigo a los responsables del artero crimen, fue el primer reclamo de Xun G. Méndez. En presencia de su pueblo pidió al IEPC no obstaculizar más el derecho de su pueblo a ejercer su proceso de autogobierno. «No queremos que se derrame más sangre. No queremos más muertos. Honro la memoria de Obidio y pido justicia para todos mis hermanos indígenas».

A pesar de la rabia y el dolor en el corazón de Xun G. Méndez, aún hay aliento para construir la paz, la armonía y la conciliación. Ello demanda cumplir con los compromisos y acuerdos rubricados.

Resumiendo lo relevante del «Pronunciamiento de Oxchuc», suscrito por los representantes de AMLO, por el representante del Gobernador electo de Chiapas, por el Consejo Presidente de Oxchuc, por el Consejo Mayor de Cherán, por el Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, por la Red Nacional Indígena y por el Movimiento Nacional Indígena.

Desde «Tres Nudos» expresamos nuestra voz:

I. Manifestamos nuestra solidaridad al pueblo de Oxchuc, que lucha por su autonomía y libre determinación.

II. Exigimos la inmediata coadyuvancia del IEPC para facilitar las condiciones del dere-

cho que tiene Oxchuc a gobernarse sin el sistema de partidos políticos.

III. Demandamos el esclarecimiento de la masacre del 24 de enero. No puede haber paz si no hay justicia.

IV. Al igual que Oxchuc, pedimos al gobierno de Chiapas respetar el derecho de autonomía y facilitar el proceso de consulta para los pueblos de Sitalá y Chilón.

V. Instamos a Rutilio Escandón, Gobernador electo de Chiapas, se comprometa a responder por las justas demandas de los pueblos indígenas.

VI. Apremiamos al Presidente de la República electo, defender una política de Estado que revise la legalidad de las empresas petroleras/mineras y asuma la defensa de los territorios indígenas.

VII. Demandamos al poder ejecutivo y legislativo de Chiapas, reconocer el derecho de los pueblos indígenas de elegir a nuestras autoridades municipales sin la intervención de los partidos políticos.

El municipio indígena de Oxchuc, junto con la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia, han iniciado un largo camino por el tortuoso camino de los Tribunales. Desde la primera revisión constitucional dictaminado por el Magistrado Manuel González Oropeza (SUP-JRC-216/2016 y acumulados) han seguido diversas resoluciones, sentencias y varias impugnaciones sobre el derecho de Oxchuc para celebrar sus elecciones con el Sistema Normativo Propio, también conocido por «Usos y Costumbres».

Múltiples factores han impedido cristalizar su aspiración, pero alentamos la esperanza que con la celebración del II Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México, Oxchuc será el tercer municipio indígena de México, que elegirá a sus autoridades sin la intervención de los partidos políticos.

Seguro estoy, que tanto Luisa Albores, Jesús Ramírez y Adelfo Regino, que encarnan la voz del próximo Presidente de la República, honrarán su palabra para facilitar que Oxchuc, conquiste su derecho al autogobierno municipal.

La gobernabilidad y la paz en los pueblos indígenas implican respetar y cumplir los derechos constitucionales en concordancia con la normatividad internacional. Retornará la paz cuando en Oxchuc se celebren las elecciones con su Sistema de Normatividad Propia por «Usos y Costumbres» y se respete el derecho histórico de elegir a sus autoridades municipales sin ninguna intromisión externa.

Solicitan a AMLO política de Estado para indígenas

San Cristóbal De Las Casas, Chiapas.

Los asistentes al segundo Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México, realizado en el municipio tzeltal de Oxchuc, pidieron al futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, que defina una política de Estado que revise la legalidad de las empresas mineras y petroleras, despliegue una estrategia de defensa de los territorios originarios y pugne por la autonomía y libre determinación de los pueblos.

Procedentes de Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y otros, los participantes exhortaron a los indígenas del país a continuar la defensa de recursos naturales, pues el planeta Tierra lo tenemos prestado y está bajo nuestro cuidado.

Durante la reunión efectuada el fin de semana, manifestaron que las petroleras y mineras despojan a los pueblos de agua, biodiversidad y recursos naturales, son una amenaza, ante lo cual es importante que el próximo gobierno revise la legalidad

de esas compañías.

Pidieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Chiapas sumarse a la agenda de López Obrador sobre la libre determinación y autonomía indígena y que armonicen las leyes con la declaración de la Organización de las Naciones Unidas y las normas jurídicas federales.

Asimismo, se pronunciaron contra la presencia de partidos políticos en comunidades y municipios indígenas, ya que sólo han dividido y fragmentado a nuestros pueblos, fomentan la corrupción social y debilitan el derecho popular de decidir la vida política y modos de vida.

Oxchuc es el único municipio chiapaneco en el que no se llevaron a cabo elecciones municipales el pasado primero de julio; los pobladores exigieron que se realicen por medio del sistema de usos y costumbres, y se efectuarán una vez que el Instituto Nacional de Antropología e Historia entregue un estudio para determinar si es factible.

A unos los vemos llegar agotados e invadidos por el miedo, de otros sabemos que no llegarán ya que se encuentran en el fondo del Mediterráneo. Huyen de la pobreza extrema y de las guerras armadas por fábricas occidentales y también chinas y rusas. Pero deberíamos saber algunos detalles de ese continente extraordinario que es África, nada menos que cuna de la humanidad. Tal vez de esa manera comprendamos mejor nuestra corresponsabilidad en el drama humano de ese fascinante continente.

Es cierto, la maldición de África viene de sus riquezas naturales. El continente alberga el 99% del cromo mundial, el 85% del platino, el 70% de las tantalitas, el 68% del cobalto, el 54% del oro. También tiene reservas significativas de petróleo y de gas, y grandes cantidades de bauxita, diamantes y maderas tropicales. La explotación de mano de obra infantil para extraer el coltan que es fundamental para la fabricación de teléfonos móviles, es uno de los grandes dramas africanos. África es el supermercado del mundo, más exactamente de las multinacionales. África sitúa a 38 países entre los 50 menos desarrollados del globo. La mayoría son ricos, pero sus riquezas no mejoran la vida de sus ciudadanos, no llegan hasta ellos: se pierden entre los gobiernos africanos, las élites locales, los señores de la guerra y las multinacionales mineras.

El año pasado se reunió en Johannesburgo el Tribunal Permanente de los Pueblos, para examinar y denunciar el expolio de África. En sus sesiones constató que la influencia y la impunidad empresarial afecta cada vez más a las comunidades locales, sobre todo en el campo, donde se producen gran parte de las expropiaciones de tierras. Esto se remonta al tiempo en que los poderes coloniales se repartieron el continente para alimentar con sus recursos las economías occidentales. El Tribunal afirma que en los últimos años, hemos presenciado una nueva ola de expropiaciones de tierras tras una crisis alimentaria global que se caracterizó por los elevados precios de los alimentos y la nece-

El grito de África



sidad de energías renovables alternativas como los agrocombustibles, considerados erróneamente como una solución a la crisis climática.

El caso es que por todo el continente se extienden agroempresas occidentales que compran tierras en condiciones muy ventajosas. Las multinacionales ganan acceso a tierras fértiles y a corredores agrícolas con la connivencia de elites locales corruptas. Algunas empresas son: Monsanto, Coca Cola, Unilever, DuPont, Cargill, Diaego, Syngenta, SAB Miller, Senhuile... Pero hay muchísimas más. ¿Saben ustedes que multinacionales farmacéuticas hacen experimentos en África para comprobar si sus productos son eficaces? En el caso Pfizer ocurrido en Nigeria murieron niños como consecuencia de las pruebas del medicamento Trovan. Fue justamente este caso el que inspiró al escritor británico John Le Carré a escribir "El jardinero fiel", novela que luego fue llevada al cine.

Cuando las potencias se repartieron África a finales del siglo XIX, los contingentes militares no tenían papeles, no llegaron en pateras. Simplemente impusieron la ley de la violencia: ocupación y colonialismo, esclavitud. La historia de África es una historia de saqueo de sus recursos y de explota-

ción violenta de sus pueblos por parte de potencias extranjeras (en particular europeas) que se enriquecieron a costa del sufrimiento (y muerte) de millones de africanos y de la destrucción de sus recursos.

La población africana siempre ha sido maltratada. Por las potencias colonizadoras y las empresas multinacionales, y también por sus propios gobernantes que practican la autocracia, el robo y la represión. Unos y otros son responsables del fraude consentido que consiste en la evasión de obligaciones fiscales por parte de multinacionales. OXFAM Internacional en un informe, señala que en 2010 -último año del que se tienen datos contrastados- las multinacionales evitaron pagar 35.000 millones de euros. África está perdiendo miles de millones. Si este dinero se invirtiera en educación y sanidad, las sociedades y economías progresarían más en el continente.

La financiación para el Desarrollo Sostenible de África debiera ser el objeto de una Conferencia Internacional que comprometa a la totalidad de países, empezando por aquellos que fueron potencias coloniales. Una política de inversiones, planificada y vinculada a las economías locales, sería muy beneficiosa. Un esfuerzo así debería ir de la mano de la agenda de equidad fiscal, asun-

to que debe ser corresponsabilidad de África y de países desarrollados y sus multinacionales.

La solución al problema imparable de la migración no consiste en abonar más dinero a Marruecos, Túnez y Libia para que hagan de gendarmes represivos, sino en planificar grandes inversiones enfocadas a que en los países de origen sea posible vivir dignamente. En realidad es nuestra obligación adquirida históricamente. Una buena parte de lo que somos y de cómo vivimos está directamente relacionado con el pasado colonial.

Está muy bien salvar vidas en el mar y atender situaciones puntuales como la del Aquarius. No cabe duda que los acuerdos entre países europeos para llevar a cabo acciones humanitarias son de aplaudir. Pero si nos preguntamos ¿qué hacemos con las migraciones? Entiendo que de lo puntual, de los parches, habrá que pasar a planes viables de desarrollo sostenible en África. Entre tanto, la mejor manera de afrontar la marea humana que trata de entrar en Europa es legalizarla y de este modo regularla y liberar a los migrantes de las mafias. Hacerlo desde una posición de acogida ordenada y en régimen cooperativo en el marco de la Unión Europea y junto con otros países que también pueden hacerlo. Nuestro continente envejece a toda velocidad y necesita de hombres y mujeres que fortalezcan la demografía y cubran déficit de fuerza de trabajo.

No se puede tolerar la matanza del mediterráneo. Sólo entre junio y julio han muerto ahogadas 721 personas, según datos de Amnistía Internacional. ¿Qué sociedades que pueden evitarlo, pueden soportar semejante barbaridad? Una vez África tuvo un sueño, y soñó que sus tierras legendarias, sus tradiciones deslumbrantes, sus culturas diversas, sus mitos, su majestuosa naturaleza, eran el hogar de pueblos prósperos dueños de sus tierras, vencedores del sufrimiento y de la muerte por hambre y por guerras.

Presos en huelga por "esclavitud" en EEUU: Se niegan a trabajar por 1 dólar la hora, 30 horas a la semana

Una industria de mil millones de dólares. Dependiendo de la prisión y el puesto, ganan entre 23 centavos y 1.41 dólares la hora. Desde hace décadas los reos protestan por sus condiciones inhumanas, considerándose a sí mismos los esclavos del siglo XXI, y en estos días se han coordinado para ir a la huelga en 17 estados.

Uno de cada cuatro prisioneros del planeta es norteamericano, el 60% de ellos trabaja para estos centros y en algunos estados del país los prisioneros no tienen opción (son trabajos forzados por el sistema penitenciario) y en otros se ven muy coaccionados a ello (beneficios penitenciarios que rozan los mínimos humanitarios, como poder cenar). Si contásemos todos los trabajos realizados en cárceles estadounidenses como un mismo empleador serían el tercero del país sólo por detrás de General Motors y WallMart. Una industria de mil millones de dólares. Dependiendo de la prisión y el puesto, ganan entre 23 centavos y 1.41 dólares la hora. Desde hace décadas los reos protestan por sus condiciones inhumanas, considerándose a sí mismos los esclavos del siglo XXI, y en estos días se han coordinado para ir a la huelga en 17 estados.

Una enmienda constitucional: la decimotercera enmienda de la constitución de los Estados Unidos prohibió «la esclavitud y la servidumbre involuntaria» salvo en un



caso, «como castigo por un delito por el cual el ciudadano ha sido debidamente condenado».

Un negocio: desde que se privatizaron, buena parte de las cárceles del país se gestionan agresivamente como un negocio. Llegan a acuerdos estatales por los que se garantizan un número mínimo de prisioneros, suban o bajen las cifras de delitos. Esto ha llevado, entre otras cosas, a cárceles públicas medio vacías que deben trasladar presos a las cárceles privadas (por lo que las públicas terminan cerrando) y también a un entramado sistémico que fuerza que nunca bajen los índices de encarcelación, por lo que indirectamente se persiguen y sancionan más

delitos menores.

Falsa competencia: tal vez la baza más seductora con la que cuentan. Un preso, aunque sea alguien encarcelado por una pena mayor como posesión de drogas, no despierta demasiadas simpatías entre la población general del país. Pero explicando el conflicto que causa esta cláusula para el libre mercado y el resto de empresas pueden ganarse al público. Compañías con ánimo de lucro contratan a los presos por salarios muy inferiores al salario mínimo fabricando productos a bajo costo, por lo que las empresas que no se hayan ganado el acuerdo penitenciario están en clara desventaja competitiva. Estos empleos, además, crean dum-

ping social: perjudican negativamente a los salarios de los trabajadores regulares de los gremios más precarios.

Ni forma, ni reinserta: mucho de su trabajo tiene que ver con el propio mantenimiento de la cárcel: cocinas, lavandería. Pero otros empleos van más allá. Algunos se dedican a limpiar carreteras estatales, a fabricar piezas de armamento militar, a trabajar en tareas que no son cara al público para Microsoft, Starbucks o McDonalds... se sabe que 2.000 presos trabajan como bomberos en California. El problema viene cuando los reclusos terminan su pena, intentan volver a las calles y descubren que su experiencia en los puestos de mayor especialización, como el de bombero, no les sirve de nada, ya que alguien con antecedentes no puede después optar a trabajos de cierto nivel.

¿Y en España? Aquí trabaja uno de cada cuatro presos. Ganan entre 2,59 y 4,51 euros la hora según especialización del puesto, cuando el salario mínimo más allá de los muros está en 5,76 euros la hora. Además de para la Administración también trabajan para algunas empresas privadas, y al finalizar su condena tienen derecho a cobrar una prestación por desempleo proporcional a los trabajos realizados. Siguen siendo condiciones de precarización y abuso por parte de los empleadores, pero algo que está muy lejos del sistema estadounidense.

Se realizará en Catamarca la primera cumbre latinoamericana por el agua para los pueblos

Con la premisa de defender el agua como bien común y vital, el 15, 16 y 17 de septiembre de este año se realizará en San Fernando del Valle de Catamarca la primera cumbre latinoamericana por el agua para los pueblos. Se trata de una iniciativa impulsada por PUCARA, el agrupamiento de asambleas provinciales nacido al abrigo de la histórica asamblea El Algarrobo de Andalgalá.

«Los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) reunidos en asamblea el día 10 de marzo de 2018 en San Fernando del Valle de Catamarca (Argentina), luego de un amplio debate de propuestas tendientes a la preservación del agua como bien común y vital, pudimos materializar la idea y comenzamos a organizar la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos», señalaron en un comunicado.

El encuentro contará con talleres y exposiciones artísticas, intercambio de información, recepción de denuncias, entre otras actividades, y servirá para poner en común experiencias de resistencia y pensar en cómo continuar en un contexto de impulso a las actividades extractivas a gran escala muy promovido desde el Gobierno de Mauricio Macri, con la amenaza de militarizar los territorios «en defensa de actividades estratégicas».

Catamarca resiste

El lugar elegido para realizar esta primera cumbre no es casualidad: «La provincia de Catamarca ha sido, al menos en Argentina, el primer territorio sometido al ejercicio del modelo extractivista, una especie de «experimento» de la megaminería a cielo abierto, modelo de saqueo, contaminación y depredación que se reproduce día a día a nivel latinoamericano, junto con el acrecentamiento de la división social, las «enfermedades raras» y el índice de mortandad en nuestras comunidades».

En la provincia funciona desde finales de los años 90 la explotación minera de oro a cielo abierto más grande del país: la mina Bajo La Alumbra, que funciona a escasos 40 km de la ciudad de Andalgalá y a 300 de la capital provincial. Muchas promesas hicieron la empresa y el Gobierno a la provincia con el fin de instalar la minería, pero en vez del progreso prometido lo único que trajeron fue contaminación y violencia.

Su caso es sorprendente: respecto al uso del agua la empresa contó con la autorización para emplear más de 86 millones de litros por día, mucho más que el consumo total de la provincia, y a nivel energético ha representado el 86 % del consumo total. Tras 20 años de explotación de la Alumbra Catamarca no solo no conoció el desarrollo económico y social sino que protagonizó la triste cifra de ser la provincia con el mayor índice de beneficiarios por la asignación universal por hijo y con niveles de pobreza más altos que el promedio nacional.



El Algarrobo de Andalgalá

Así nace «en defensa propia», como dice Silvina Reguera, la asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Sergio Martínez recuerda y cuenta cómo luego de ver un video a fines del año 2009 decidieron ir con otro vecino a cortar el paso a la minera Agua Rica, que venía a instalarse también allí: «Nos vamos al lugar donde estaba el arbolito ese, el algarrobo, nos paramos los dos y durante el transcurso de la semana se fueron sumando los vecinos de Andalgalá. Así fue que al final de la jornada dijimos 'bueno si duramos un día sigamos con otro día', y pasamos Navidad, Año Nuevo y nos quedamos». El 15 de febrero de 2010 el Gobierno provincial intentó levantar el corte con la policía, pero los vecinos resistieron la orden de desalojo a pesar de una ferozísima represión.

Agua Rica es un proyecto minero sobre el Nevado del Aconquija, contempla una integración con la Alumbra, pero es aún mucho más grande que esta. Por ahora, el proyecto está paralizado gracias a la resistencia vecinal y a una orden de la Corte Suprema que ordenó a la justicia catamarqueña responder a las demandas planteadas por los vecinos sobre las controversias que rodean al Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa, cuestionado incluso por la propia Universidad de Tucumán. La Asamblea el Algarrobo realiza todos los sábados una «caminata por la vida», que sostienen desde el año 2010, cuando ese 15 de febrero fueron ferozmente reprimidos. Ya llevan 452 caminatas y ocho años logrando que Agua Rica no se instale en su territorio. Según Silvina Reguera: «Toda esta lucha es en defensa propia. No hemos frenado un solo proyecto sino dos: Pilsao 16 y Agua Rica, y en ese camino otras asambleas se unieron a nosotros, nos pidieron ayuda y fuimos a otros pueblos donde hoy hay asambleas propias y resistencias, o sea, la Asamblea el Algarrobo, con sus acciones ha sentado un importante precedente histórico, jurídico, institucional y social en la vida de muchas poblaciones locales, provinciales y nacionales».

Desde PUCARA denuncian que «en res-

puesta a este avasallamiento contra nuestros derechos y los de la naturaleza, nos vemos ante la necesidad de convocar a todas las comunidades latinoamericanas para exigir a los Estados el agua como un derecho humano para los pueblos, porque sin agua no hay vida, ninguna posibilidad de vida humana ni de cualquier otro tipo».

Derecho humano al agua y al saneamiento La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 64/292, reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable y limpia es esencial para la realización de todos los demás derechos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 15 sobre el Derecho al Agua, establecen que el «Derecho Humano al agua es indispensable para toda vida humana digna».

Sin embargo, desde los convocantes a la cumbre señalan: «Conocemos los antecedentes de mal manejo del agua por parte de los Estados quienes, bajo la consigna del 'desarrollo', priorizan el uso y el abuso del agua por parte de las empresas extractivistas transnacionales, dejando por fuera la decisión y el consenso de los pueblos. Nosotros venimos sufriendo las consecuencias de este ponderado 'desarrollo' que usa al vital elemento como medio negociable y no un bien común».

Fauna amenazada por la megaminería

En la zona donde pretende instalarse la minera Agua Rica habitan especies silvestres de valor especial. Muchas son endémicas de esa zona (es decir, que viven sólo en ese lugar del mundo) y otras están amenazadas, viéndose afectadas por las actividades mineras a gran escala.

Diego Olivera, naturalista y docente que recientemente hizo un relevamiento de los ambientes de la zona, detalla que «las detonaciones, la desaparición de la cubierta vegetal, el potencial aplastamiento y atropellamiento por vehículos, especialmente en el caso de anfibios, la modificación y afectación de las cabeceras de las cuencas de ríos, contaminación directa, y que muchas veces

los operarios de las minas salen a cazar mamíferos y aves, son las amenazas más directas a la fauna nativa del lugar».

Algunas especies de fauna de especial valor que viven en el área son la Taruca, un ciervo nativo del continente americano en peligro de extinción, la ranita montana que es un anfibio exclusivo de la sierra del Aconquija, la ranita marsupial, otra especie exclusiva del país endémica de las yungas australes, la ranita del manchao y la ranita del arenal. Otro anfibio endémico de la región es la lagartija Liolaemus salinicola, que habita especialmente campos de dunas, por lo cual es extremadamente vulnerable a los cambios en su ambiente. Entre las aves del área destacan el águila coronada y la monjita salinera.

«Otro impacto de la megaminería es el material particulado fino, que se deposita en enormes volúmenes y toneladas sobre cuerpos de agua, como lagunas de altura, vegas y sobre la cubierta vegetal de toda la región, que puede además afectar la captación de luz solar y el proceso de fotosíntesis. Las detonaciones además impactan en el comportamiento y los movimientos de manadas de grandes mamíferos como el guanaco y en predadores como los zorros y pumas», agrega el naturalista.

Cumbre por el agua

«Por todo esto, y porque consideramos que sólo es posible vivir en un ambiente sano y decidir nuestra forma de vivir, estableciendo libremente cómo queremos que sea nuestro desarrollo económico, social y cultural, teniendo disponibilidad y control del agua en cantidad y calidad, decidimos convocar a la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos», señalaron en su convocatoria las asambleas de PUCARA.

La cumbre se propone como objetivos principales el afianzamiento de las relaciones solidarias entre los pueblos afectados por las actividades extractivas, aunar criterios para la lucha y la resistencia, exigir a los Estados el reconocimiento y respeto del agua como derecho humano, impulsar la soberanía alimentaria y crear una red latinoamericana de defensa del agua para los pueblos.

Tendrán oportunidad de verse e intercambiar conocimientos las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, las asambleas socioambientales, organizaciones sociales y de derechos humanos, artistas, investigadores, abogados y todo aquel que tenga interés en conocer las luchas de los pueblos en defensa de los bienes comunes. Para colaborar con la financiación colectiva y que este logro se concrete, los convocantes están recibiendo donaciones para cubrir los gastos de organización y logística. Las donaciones pueden hacerse a la cuenta de Daniel Gustavo Sosa CBU: 0110115330011503746383 CUIL: 20161934896. Para mayor información: 1cumbredelagua@gmail.com o 1Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos.

Amnistía Internacional alerta sobre acusaciones de militares contra activista indígena venezolana

Amnistía Internacional denunció hoy que la indígena venezolana defensora de los derechos medioambientales Lisa Henrito fue acusada públicamente por un mando militar de «traición» por su activismo contra la explotación minera en sus territorios ancestrales sin estudios previos de impacto social y ambiental.

«El 23 de julio, la defensora medioambiental indígena pemón Lisa Henrito fue acusada de 'traición' y 'secesión' por un mando de las Fuerzas Armadas en la televisión nacional de Venezuela», dijo Amnistía Internacional (AI) en un comunicado.

La organización internacional no reveló el nombre del militar que hizo las declaracio-

nes sobre la activista indígena o del medio de comunicación en el que las hizo.

Henrito es una indígena pemón, una etnia que habita en el sur de Venezuela, donde se ubican además riquezas minerales que han sido explotadas ilegal y legalmente pese a las protestas de los habitantes ancestrales de la zona.

En su escrito, AI señaló que Henrito «está siendo estigmatizada por su labor como activista de organizaciones de mujeres indígenas pemones que exigen el fin de la militarización y la explotación minera de sus territorios ancestrales sin consulta informada ni estudios del impacto social previos».

Asimismo, indicó que el Estado debe garantizar la protección de la integridad física de Lisa Henrito y otras personas que son también activistas indígenas y del medioambiente «y poner fin a su difamación y a la estigmatización de sus acciones de defensa de los derechos de sus comunidades».

Amnistía Internacional recordó que esta es una exigencia contemplada en la Constitución venezolana y también en «mecanismos internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos indígenas y sus tierras, su territorio y su medioambiente».

En 2015, la comunidad pemón pasó varios días en protesta contra la minería ilegal en el Parque Natural de Canaima, Patrimonio de la Humanidad.



Las conexiones de Ciudadanos con la ultraderecha española en Catalunya

Cada día es más evidente las conexiones que existen entre Ciudadanos, partido situado a la derecha del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y que aspira a ganar las próximas elecciones generales, y organizaciones y personajes de la ultraderecha española en Catalunya. Recientemente, en una concentración convocada por Ciudadanos para denunciar la agresión sufrida por una mujer cuando quitaba lazos amarillos –símbolo de que hay presos políticos– grupos ultras agredieron a un cámara de Telemadrid al grito de "fuera TV3". El periodista recibió varios golpes en la cabeza. En esa misma concentración se exhibieron algunos símbolos ultras entre ellos una bandera del movimiento identitario francés de extrema derecha.

La concentración acabó con el cántico legionario del Novio de la Muerte, himno de la Legión, una unidad militar fundada en 1920 por el amigo personal de Franco, Millán Astray. Este mismo himno –que hace apología fascista y militar– también fue cantado, en la pasada semana santa, por tres ministros de Rajoy: Zoido, Catalá y Méndez Vigo.

A muchos les ha sorprendido que en un acto de Ciudadanos aparezcan violencia y simbología ultra. Pero a otros no les ha sorprendido.

Desde hace años, las relaciones entre Ciudadanos, Vox (otro partido de la ultraderecha sin representación parlamentaria) y la ultraderecha española va en aumento.

Hace casi un año, el 8 de octubre de 2017, personajes como Mario Vargas Llosa y el que ahora es ministro de exteriores con el PSOE, Josep Borrell, participaron en un acto de carácter fascista y violento.

Una de las organizaciones que la ultraderecha utiliza para sus fines en "pro de la unidad de España" es Societat Civil Catalana (SCC). En la presentación de esta asociación, creada en abril de 2014, se encontraban Santiago Abascal y Ariadna Hernández de Vox, una delegación de representantes de la Fundación Nacional Francisco Franco y miembros del Movimiento Social Republicano (referentes en España del partido fascista griego Amanecer Dorado). Esta conexión, más allá de ser una anécdota, se encuentra en el germen de la organización. Según destapa el periodista Jordi Borràs en su libro Plus Ultra, la creación de SCC fue "una acción cuidadosamente estudiada y planificada por la necesidad imperante de reagrupar un españolismo profundamente desmovilizado". Dicha influencia se ve reflejada en la figura de su primer presidente Josep Ramon Bosch, quien también ocupó simultáneamente durante un año y medio la presidencia de Somatemp



hasta que tuvo que dimitir por sus vínculos con la extrema derecha. El nombre de esta entidad es resultado del juego de palabras entre Som a temps (en catalán, "estamos a tiempo" de parar el independentismo) y el Sometent (el somatén, organización paramilitar catalana de autodefensa civil), explica Borràs en su obra.

Tanto SCC como los grandes grupos mediáticos tratan de ocultar la influencia ultra en este grupo, incluidos sus actos violentos.

Desde la fundación de SCC las agresiones de los ultras han aumentado. En cada acto convocado por SCC, el 12 de octubre de cada año para defender la unidad de España, se han sumado trece o catorce organizaciones de extrema derecha como Falange, Hazte Oír o Democracia Nacional.

Otra de las organizaciones con mayor peso de convocatoria en estos últimos tiempos ha sido la Fundación DENAES (Defensa de la Unidad de España) del líder de Vox Santiago Abascal. En una de sus concentraciones, realizadas en la madrileña plaza de Cibeles, finalizó cantando el himno franquista Cara al sol con el brazo en alto y en la que estuvo presente Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, es alcaldesa de Madrid y connotada dirigente del PP de Rajoy.

Precisamente, entre las convocantes de la concentración también se encontraban las fundaciones Valores y Sociedad y Villacisneros, vinculadas al exministro de Interior Jaime Mayor Oreja y a la expresidenta de la Comunidad de Madrid; además de las habituales Somatemp y Hazte Oír.

DENAES llegó a recibir 183.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid y su creador Santiago Abascal, ahora secretario, trabajó para el Ejecutivo de Aguirre como presidente de la Agencia de Protección de Datos y director de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social.

En los actos de SCC no sólo se ha visto a numerosos dirigentes del PP catalán con su presidenta al frente, Alicia Sánchez-Camacho. También se ha visto la plana mayor de VOX, de UPyD, Ciudadanos y, sobre todo, del Partido Socialista de Catalunya (PSC), el partido del actual presidente, Pedro Sánchez. De hecho, el vicepresidente de SCC, Joaquim Coll, es militante del PSC y el primer secretario de los socialistas no ha ocultado nunca su simpatía por la entidad, a pesar de las claras vinculaciones con la ultraderecha. Tanto es así que en los actos de SCC se ha podido ver al mismo Miquel Iceta, máximo responsable de



Pepe Mejía desde Madrid

los socialistas en Catalunya. Pero también la presencia significada de ex legionarios que hacen apología del fascismo militarista.

SCC, lejos de plegar velas y disolverse, ahora ya ha entrado en el Parlament de Catalunya, de la mano de las diputadas de Ciudadanos Susana Beltran (vicepresidenta de SCC) y Sonia Sierra, dos dirigentes de SCC que ahora ocupan dos de los veintinueve escaños que el partido de Albert Rivera ha obtenido en las elecciones del 27-S del pasado año.

SCC tiene verdadero pánico a que se le vincule con la extrema derecha. Lanzaron amenazas a la revista británica especializada en la ultraderecha Hop Not Hate, por haber publicado el reportaje «Sociedad Civil Catalana, the Spanish faro right's sinister shadow in Catalonia» (Sociedad Civil Catalana, la siniestra sombra de la ultraderecha española en Cataluña).

La división entre los grupos de extrema derecha ha sido una constante desde hace 40 años, desde la disolución del partido político Fuerza Nueva (1976–1982), que tenía como presidente al franquista Blas Piñar y por eslogan "Dios, Patria y Bandera". Pero ahora hay una máxima que vuelve a unir la extrema derecha: garantizar la unidad de España. Este objetivo común une en las calles a organizaciones como Democracia Nacional, Nudo Patriota Español, Alianza Nacional, Hazte Oír, Falange Española de las JONS, Falange Auténtica, Hogar Social, Último Bastión, Legión Urbana, Generación Identitaria, Vox, Som Identitaris, Movimiento Social Republicano (que forma parte de la Alianza Europea de Movimientos Nacionales), Somatemp y una larga lista de grupos extremistas.

Además de sus mensajes xenófobos, racistas y españolistas ejercen la violencia. Tienen en su punto de mira a periodistas y medios de comunicación, sobretodo de TV3 y Catalunya Radio. Pero también a ciudadanos identificados como independentistas, e increpan a los Mossos d'Esquadra, cuerpo policial autonómico de Catalunya. El 8 de octubre del pasado año agredieron a un fotógrafo e insultaron a un periodista de TV3; el 12, hubo una batalla campal de ultras frente al bar Zurich y el 29 un grupo de neonazis se enfrentó a los Mossos en Plaça Sant Jaume, entre otros incidentes.

